


RV: RADICACION DEMANDA LABORAL ORDINARIA DE PRIMERA INSTANCIA ANA MARIA LINARES CASTRO

Oscar Eduardo Cohetato Medina <ocohetam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 07/11/2023 8:47

Para: Juzgado 01 Laboral Circuito - Huila - Neiva <lcto01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Oficina Judicial - Seccional Neiva <ofjudneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co>; alejandroabogado86 <alejandroabogado86@gmail.com>

 2 archivos adjuntos (3 MB)

DEMANDA, PRUEBAS.pdf; 1082 ACTA.pdf;

Cordial Saludo;

Comedidamente me permito enviarle el Acta No. 1082 para su tramite respectivo.

Se envían los archivos en el estado en que fueron recibidos del remitente, cualquier inconsistencia, error, aclaración o complementación de información debe dirigirse, directamente, al usuario y / o despacho.

Cordialmente.



OSCAR EDUARDO COHETATO MEDINA

OFICINA JUDICIAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA

Carrera 4 No. 6-99 Neiva - Huila

ocohetam@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Reparto Juzgados Laboral - Huila - Neiva <repartolaboralInva@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: viernes, 3 de noviembre de 2023 16:14

Para: Oscar Eduardo Cohetato Medina <ocohetam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: RADICACION DEMANDA LABORAL ORDINARIA DE PRIMERA INSTANCIA ANA MARIA LINARES CASTRO

Cordial saludo:

Reenvío DEMANDA para que sea sometida a reparto y enviar al Despacho Judicial que le corresponda por reparto.

Se envían los archivos en el estado en que fueron recibidos del remitente, cualquier inconsistencia, error, aclaración o complementación de información debe dirigirse, directamente, al usuario y / o despacho.

Atentamente,



Señores:
JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA (REPARTO)
E.S.D.

REFERENCIA:	PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE:	ANA MARIA DEL PILAR LINARES CASTRO identificada con cedula de ciudadanía número 36.180.927
DEMANDADOS:	<ul style="list-style-type: none">• COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS• ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
ASUNTO:	PRESENTACION DE DEMANDA

JORGE ALEJANDRO BERNAL MOLINA, mayor de edad, abogado en ejercicio, identificado con cedula de ciudadanía numero 1.075.218.157 expedida en Neiva y portador de la Tarjeta Profesional No. 259.603 Del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la señora **ANA MARIA DEL PILAR LINARES CASTRO identificada con cedula de ciudadanía número 36.180.927**, lo cual acredito con el poder que adjunto, respetuosamente concurre ante su despacho con el propósito de instaurar **DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**, en contra de **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS** identificada con NIT No. 800.149.496-2 y su representante legal o quien haga sus veces, y en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** identificada con NIT No. 900.336.004-7 y su representante legal o quien haga sus veces, con base en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: La señora ANA MARIA DEL PILAR LINARES CASTRO, nació el día 21 de agosto de 1966, desde el 16 de mayo de 1990 estuvo afiliada al Sistema de Seguridad Social, efectuando desde esta fecha sus aportes al Instituto de Seguro Social – ISS – hoy COLPENSIONES.

SEGUNDO: En vigencia de la Ley 100 de 1993, el 01 de abril de 1994, mi poderdante se encontraba afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, hoy administrado por COLPENSIONES, y actualmente cuenta con 1404,71 semanas cotizadas.

TERCERO: La Señora ANA MARIA DEL PILAR LINARES CASTRO estuvo afiliada y cotizo al fondo público administrado actualmente con COLPENSIONES hasta el mes de junio del año 1998.



CUARTO: Mi poderdante en el mes de agosto de 1998 encontrándose en su lugar de trabajo, recibe un asesor comercial del fondo privado de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, quien se acercó para ofrecerle el traslado de régimen pensional, donde le aseguró a mi poderdante que sí se trasladaba a COLFONDOS tenía la posibilidad de pensionarse antes de la edad requerida, sin esperar a la edad de 57 años y recibir una mesada pensional por mayor valor, incumpliendo COLFONDOS con el deber legal de informar de forma clara, precisa y oportuna sobre las características de cada uno de los regímenes y las ventajas y desventajas del traslado de fondo.

QUINTO: A su vez, en dicha asesoría comercial, se argumentó a mi poderdante que, el INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL – ISS, HOY COLPENSIONES, sería liquidado afirmando que, al continuar en dicha Institución, los aportes pensionales (DINERO) y tiempo de cotizados, desaparecerían y perdería todo ese dinero y tiempo cotizado, por tal razón, el asesor suministró un formulario de afiliación a mi poderdante el cual firmo el día 30 de agosto de 1998, luego de la errónea e insuficiente información suministrada a la señora ANA MARIA, incumpliendo COLFONDOS con el deber legal de informar de forma clara, precisa y oportuna sobre las características de cada uno de los regímenes y las ventajas y desventajas del traslado de fondo.

SEXTO: Ahora bien, en dicha conversación con el asesor de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CEANTIAS, no se informó de forma suficiente, clara, comprensible y oportuna a mi poderdante, sobre las características de cada régimen pensional, así como las consecuencias reales de abandonar el régimen de prima media y afiliarse al fondo privado, a la vez de que tampoco realizaron el cálculo pensional, y no informaron sobre el capital suficiente para financiar la Pensión de Vejez de acuerdo al salario que recibía mi poderdante, y mucho menos la edad exacta para la redención normal del Bono Pensional, no mencionaron la probabilidad de pensionarse en cada régimen, y el monto proyectado que se recibiría por el fondo privado o por el fondo público, no se realizó la proyección del valor de la indemnización sustitutiva o devolución de saldos, los requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima en cada régimen, información sobre otros mecanismos de protección a la vejez vigentes dentro de la legislación, que de haberse realizado, la señora ANA MARIA había tenido los elementos técnicos y jurídicos reales para haber tomado la decisión que más le favorecía, de acuerdo al régimen que garantizará una mejor condición de sus garantías pensionales y que no afectara su mínimo vital.



SEPTIMO: Por otro lado, LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, previamente a efectuar el traslado de la afiliada, no cumplió con su deber legal de brindar la información suficiente, clara, comprensible y oportuna, sobre las características de los dos regímenes, así como las consecuencias reales de abandonar el régimen de prima media, incumpliendo así con su deber legal de garantizar a sus afiliados la información completa, veraz, oportuna y verificable sobre las condiciones y las consecuencias del traslado del régimen de pensión, lo que vulneró el derecho de mi poderdante a recibir una información veraz, oportuna y completa sobre las consecuencias de su traslado.

OCTAVO: En este sentido, COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS y LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES tenían la obligación inexcusable, y el deber legal de proporcionar información veraz, real y oportuna acerca de las consecuencias del cambio de régimen, esto es que, previo al traslado, la afiliación y vinculación a la administradora COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS S.A, le correspondía a las administradoras, COLPENSIONES y a COLFONDOS, advertir el riesgo y las posibles consecuencias que generaría dicho traslado, las características de pensionarse en el régimen público y las del régimen privado de manera veraz, o en su defecto, no tramitar la afiliación ante la omisión de no proporcionar tan trascendental información, se resalta de nuevo, que el traslado de mi representada, se hizo bajo información irreal y mendaz de un asesor, con el único motivo de inflar sus comisiones, pasando por encima del deber legal de otorgar una información a sus afiliados, con proyecciones reales de los valores a pensionarse en cada régimen.

NOVENO: Lo anterior, cobra mayor fuerza, pues, al no suministrar la información adecuada, suficiente y cierta para dicho traslado con las consecuencias pensionales que traería para mi poderdante dicho traslado, se lesionó el derecho a una información veraz, completa y verificable sobre el traslado del régimen pensional, que le resguardara de las contingencias derivadas de la vejez o la invalidez que más favoreciera a mi representada, de acuerdo a las particularidades de cotización que realizaba mi poderdante.

DECIMO: Adicionalmente, para la fecha en la que la señora ANA MARIA se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad –en agosto de 1998-, la obligación de COLFONDOS se enmarcaba en que debía entregar información suficiente y transparente que le permitiera A MI REPRESENTADA elegir con información veraz, la opción que mejor se ajustara a sus intereses y que le garantizaran el mayor beneficio para la protección de su mínimo vital (CSJ: SL1452-2019, SL1688-2019 y SL1689-2019, SL1055 de 2022),



conforme al literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 97 numeral 1.o del Decreto 663 de 1993 -posteriormente modificado por el 23 de la Ley 795 de 2003-, lo cual implica la ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales.

DECIMO PRIMERO: Igualmente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral se ha enfocado en garantizar el derecho básico de los trabajadores a recibir información necesaria, objetiva y transparente durante el proceso de traslado de régimen pensional, como una garantía mínima consagrada en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que encuentra respaldo en el **artículo 272 de la Ley 100 de 1993 y se armoniza con artículo el 13 del Código Sustantivo del Trabajo**, que consagra que cualquier estipulación que afecte o desconozca los derechos mínimos «no produce efecto» (CSJ SL3871-2021), de modo que incumplida esa prerrogativa, es imperativo declarar la ineficacia del traslado.

DECIMO SEGUNDO: El suscrito en representación de la señora ANA MARIA DEL PILAR LINARES CASTRO solicito a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES el día 20 de septiembre de 2023, la ineficacia del traslado del RPMD al RAIS, frente a la cual, se recibió respuesta el 05 de octubre de 2023, donde se niega la ineficacia del traslado, argumentándose que la afiliación fue libre y voluntaria, a su vez, se solicitó acreditar el cumplimiento del deber de información sobre las consecuencias y riesgos del traslado de fondo, frente a esta solicitud, guardo silencio, sin que se logrará demostrar el cumplimiento de su deber legal establecido en la ley 100 de 1993, que consistía en haber suministrado al afiliado una información completa, veraz, verificable y oportuna, donde se realizara las proyecciones reales de adquirir una pensión de vejez en el fondo privado o el fondo público, lo que no se demostró con la respuesta por parte de COLPENSIONES del 05 de octubre de 2023.

DECIMO TERCERO: A su vez, el día 20 de septiembre de 2023 se solicitó a COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS, la ineficacia de su afiliación y traslado de régimen, sin embargo, la demandada no dio respuesta dentro del término legal, y el suscrito luego de interponer acción de tutela, el 24 de octubre de 2023 se recibe respuesta de la petición, donde se niega la ineficacia argumentando que no es procedente porque no es beneficiaria del régimen de transición, contradiciendo el precedente jurisprudencial establecido en la sentencia CSJ SL1055-2022.

DECIMO CUARTO: De igual manera, en la solicitud presentada a COLFONDOS el día 20



de septiembre de 2023, se solicita que, se entregue la documentación que acredite que COLFONDOS brindó a la señora ANA MARIA DEL PILAR la información sobre las ventajas, y desventajas, así como las consecuencias y riesgos de trasladarse de fondo, proyección de la mesada pensional en el fondo privado o el fondo público, o en caso de no existir dicha documentación que, certifique las razones de no haber cumplido con este deber legal de información, punto sobre el cual, COLFONDOS manifestó que los asesores son los que brindan dicha explicación, y que esa información se encuentra en la página web, así las cosas, no se logrará demostrar el cumplimiento de su deber legal establecido en la ley 100 de 1993, y con dicha respuesta lo que se evidencia es que COLFONDOS únicamente hizo el diligenciamiento del formulario de afiliación, sin que se le brindará información completa, veraz, verificable y oportuna, donde se realizara las proyecciones reales de adquirir una pensión de vejez en el fondo privado o el fondo público, configurándose así, la vulneración al derecho de información de mi poderdante.

DECIMO QUINTO: Por otra parte, COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS entrego una proyección de la mesada pensional de la señora ANA MARIA DEL PILAR LIANRES CASTRO, en la respuesta del derecho de petición presentado, el 24 de octubre de 2023, según la cual, recibiría en el fondo privado una mesada pensional del salario mínimo, es decir, la suma actual de **\$1.160.000.00**, hecho notorio que evidencia la grave afectación y perjuicio ocasionado a mi poderdante, toda vez que, la Señora ANA MARIA DEL PILAR durante toda su vida laboral ha cotizado muy superior al salario mínimo, y actualmente recibe ingresos salariales superiores a \$3.500.000.00, por lo que de pensionarse en el fondo privado se vería afectado su mínimo vital, configurándose en el presente asunto que, COLFONDOS nunca entrego a mi poderdante información oportuna, y verificable, pues la pensión recibida en el fondo publico administrado por COLPENSIONES sería mucho más beneficioso para mi poderdante, garantizándole su mínimo vital. Además, si se hubiera entregado esta información de proyección pensional al momento previo de realizarse su formulario de afiliación, la misma no hubiera autorizado tal traslado.

DECIMO SEXTO: En consecuencia, las demandadas incumplieron con su deber legal de brindar al afiliado, la señora ANA MARIA DEL PILAR LINARES CASTRO información, clara, precisa y completa sobre las ventajas y desventajas y las consecuencias del traslado de régimen de prima media al régimen de ahorro individual, además de ocasionar graves perjuicios y afectar el patrimonio de mi poderdante, en los términos de la sentencia CSJ SL1055-2022.

Con fundamento en las anteriores premisas fácticas, se presentan las siguientes:



PRETENSIONES

PRIMERA: Se **DECLARE** INEFICAZ Y SIN EFECTO JURÍDICO ALGUNO, el traslado del REGÍMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA al REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD, realizado mediante formulario de afiliación con fecha del 30 de agosto de 1998, administrado por COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS realizado a la señora ANA MARIA DEL PILAR LINARES CASTRO, toda vez que, COLFONDOS incumplió con el deber legal de información previa, completa, suficiente y transparente, que le permitiera a la señora **ANA MARIA DEL PILAR LINARES CASTRO** identificada con cédula no. 36.180-927 de Neiva, elegir la opción que mejor se ajustara a sus intereses, lo cual implica la ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, así como la proyección de su mesada pensional en el fondo privado y en el fondo público.

SEGUNDA: Se **DECLARE** INEFICAZ Y SIN EFECTO JURÍDICO ALGUNO, el traslado del REGÍMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA al REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD, realizado a la señora ANA MARIA DEL PILAR LINARES CASTRO, toda vez que, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, también incumplió con el deber legal de información previa, completa, suficiente y transparente, que le permitiera a la señora ANA MARIA DEL PILAR LINARES CASTRO identificada con cédula no. 36.180-927 de Neiva, elegir la opción que mejor se ajustara a sus intereses lo cual implica la ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos del traslado de régimen pensional, así como la proyección de su mesada pensional en el fondo privado y el fondo público.

TERCERA: En consecuencia, **SE DECLARE** que mi poderdante la señora **ANA MARIA DEL PILAR LINARES CASTRO** identificada con cédula no. 36.180-927 de Neiva SIEMPRE ESTUVO AFILIADA AL REGIMEN DE PRIMA MEDIA, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

CUARTA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se **ORDENE** Y CONDENE a **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS** realizar el traslado del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual de la Señora **ANA MARIA DEL PILAR LINARES CASTRO**, con destino al instituto Colombiano de Seguros Sociales hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, junto



con los respectivos rendimientos y los bonos pensionales a que haya lugar; así como los gastos de administración, las comisiones, los porcentajes destinados a conformar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y los valores utilizados en seguros previsionales con cargo a sus propias utilidades, todos estos debidamente indexados. Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, así como el traslado de la información en la que detalle los aportes efectuados, de conformidad con los artículos 7° y 8° del Decreto 3995 de 2008 y demás normas concordantes.

QUINTA: Que se **ORDENE** y **CONDENE** a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, aceptar el traslado del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual de la Señora **ANA MARIA DEL PILAR LINARES CASTRO**, junto con sus respectivos rendimientos, el cual hará efectivo COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS.

SEXTA: Que se **CONDENE** a las demandadas a pagar las costas y agencias en derecho.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES

Ahora bien, la presente se interpone con fundamento en las siguientes normas aplicables para la procedencia de la Ineficacia del traslado de régimen:

Artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en sus literales b) y e), modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003; artículos 3° del Decreto 692 de 1994 y artículo 2° inciso segundo del Decreto 1642 de 1995, reconocen el derecho que tiene toda persona a elegir libre y manera informada el régimen pensional al que quiere pertenecer.

“ARTICULO. 13. Características del sistema general de pensiones: El sistema general de pensiones tendrá las siguientes características:

(....)

b) La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1° del artículo 271 de la presente ley;

(....)



a) *Los afiliados al sistema general de pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada tres (3) años, contados a partir de la selección inicial, en la forma que señale el Gobierno Nacional;*

(...)”

La libertad de elección presupone conocimiento de los regímenes pensionales, así como de las consecuencias que implica la elección. Este conocimiento, a su vez, se rige por el principio de la información, el cual vincula al empleador al momento de enganchar al trabajador, así como a la administradora de fondos de pensiones, al momento de afiliarse o trasladarse.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha derivado este principio del artículo 13 literal b) de la Ley 100 de 1993, en el que ha indicado que las administradoras de fondos de pensiones tienen la obligación de brindar asesoría seria y concreta, conforme con un análisis o estudio previo de la posición, la condición y la situación fáctica del afiliado. Esta información tiene como finalidad permitirle a los afiliados o usuarios del sistema pensional a adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional, así como las ventajas y desventajas de la elección.

El principio de información se concreta, a su vez, en las siguientes obligaciones: a) se debe suministrar información y asesoría a través de un lenguaje claro, simple y comprensible, y; b) debe darse a conocer toda la verdad objetiva –y comparada– de los regímenes, evitando sobredimensionar lo bueno, callar lo malo y parcializar lo neutro.

Por tanto, la incursión en el mercado de las AFP no fue totalmente libre, pues, aunque la ley les permitía lucrarse de su actividad, correlativamente les imponía **un deber de servicio público**, acorde a la inmensa responsabilidad social y empresarial que les asistía de dar a los usuarios la información necesaria para lograr la transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado (C. Sup. Jus., SL 1688-2019, p. 18)

Por otra parte, la jurisprudencia de la sala laboral de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ha establecido **como precedente jurisprudencial** la **SENTENCIA SALA DE CASACION LABORAL MAGISTRADO IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ SL1055-2022 Radicación n.º 87911., dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022)**. La Corte decide el recurso de casación que ÓSCAR TULIO ACERO GARCÍA interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 25 de junio de 2019, en el proceso ordinario que adelanta contra la ADMINISTRADORA



COLOMBIANA DE PENSIONES–COLPENSIONES, la ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS y OLD MUTUAL S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, trámite al cual fue vinculada en calidad de litisconsorte necesario la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES-UGPP.

Pues bien, es menester recordar que la Corte ha precisado de manera pacífica y reiterada que desde que se implementó el Sistema Integral de Seguridad Social en pensiones, se estableció en cabeza de las AFP el deber de ilustrar a sus potenciales afiliados en forma clara, precisa y oportuna acerca de las características de cada uno de los dos regímenes pensionales, con el fin de que pudieran tomar decisiones informadas.

Asimismo, ha explicado que ese deber de información ha cobrado mayor exigencia con el paso de los años y para ello se identifica tres periodos: el primero desde 1993 hasta 2009, el segundo desde de 2009 hasta 2014 y, el último, de 2014 en adelante.

Así, para la fecha en la que la demandante, la Señora ANA MARIA DEL PILAR LINARES CASTRO, se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad en el año 1998, la obligación de la AFP se enmarcaba en el primer periodo, según el cual debía entregar información suficiente y transparente que le permitiera elegir «libre y voluntariamente» la opción que mejor se ajustara a sus intereses (CSJ: SL1452-2019, SL1688-2019 y SL1689-2019), conforme al literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 97 numeral 1.º del Decreto 663 de 1993 -posteriormente modificado por el 23 de la Ley 795 de 2003-, lo cual implica la ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales.

Es decir que, para el momento del traslado de mi poderdante, el orden jurídico colombiano sí contemplaba un deber de asesoría e información suficiente y transparente, pues desde la creación del sistema el legislador previó en el precitado precepto el derecho de toda persona a elegir libre y voluntariamente el régimen pensional, lo cual no puede desconocerse, atentarse o impedirse en cualquier forma, so pena de las sanciones de que trata el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 y que la afiliación quede sin efecto, esto es, que se produzca su ineficacia, lo que ocurre justamente cuando la AFP omite su deber de información, tal y como lo ha señalado la Corte (CSJ SL4360-2019).

Asimismo, corresponde al JUEZ hacer un juicio valorativo respecto al cumplimiento del deber de información, el cual, ha señalado y reiterado la CORTE SUPREMA, que, no se



agota con la sola firma del formulario de afiliación. En efecto, la jurisprudencia de esta Corte ha precisado de forma reiterada que la suscripción de aquel documento, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos pre-impresos, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de esta clase, **SON INSUFICIENTES** para dar por demostrado dicho deber (CSJ: SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, SL4964-2018, SL12136-2014, reiterada en SL19447-2017, SL4964-2018, SL1421-2019 y SL2877-2020).

Adicionalmente, **ni la legislación ni la jurisprudencia tienen establecido que para verificarse el deber de información la persona afiliada tenga que ser beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993** o esté próxima a consolidar el derecho pensional. Lo anterior porque la ineficacia se predica frente al acto jurídico de traslado considerado en sí mismo y para ello únicamente debe verificarse si dicho requisito para su eficacia se cumplió o no (CSJ SL142-2018, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 reiteradas recientemente en CSJ 2208-2021).

Téngase presente que el análisis judicial sobre el cumplimiento del deber de información a cargo de los fondos privados está al margen, en principio, de la situación pensional de la persona, por lo que no sería coherente exigir que el afiliado se ocupe de verificar su estatus pensional, como equivocadamente lo concluyó el Tribunal, o se acredite que el traslado causó una lesión injustificada que impidió el acceso a un derecho pensional en abstracto, a menos que el litigio se dirija justamente a acreditar un perjuicio como pretensión complementaria, lo que no sucedió en el asunto.

Y es que en un estadio de afiliación activa al sistema y más aún cuando el derecho pensional aún está en formación, los jueces no pueden elucidar en abstracto sobre la conveniencia de estar o permanecer en uno u otro régimen y los perjuicios que ello eventualmente acarrearía, pues cada uno de los modelos consignan características que pueden ser convenientes tanto para el afiliado como a sus eventuales beneficiarios en determinada situación particular.

A raíz de ello, la jurisprudencia de la Corte se ha enfocado en garantizar el derecho básico de los trabajadores a recibir información necesaria, objetiva y transparente durante el proceso de traslado de régimen pensional, como una garantía mínima consagrada en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que encuentra respaldo en el artículo 272 de la Ley 100 de 1993 y se armoniza con artículo el 13 del Código Sustantivo del Trabajo, que consagra que cualquier estipulación que afecte o desconozca los derechos mínimos «no produce efecto» (CSJ



SL3871-2021), de modo que incumplida esa prerrogativa, es imperativo declarar la ineficacia del traslado.

Pues bien, como se explicó en las sentencias CSJ SL5686-2021 y SL5688-2021, los argumentos de esta índole son inadmisibles pues desatienden que el eje central de estas discusiones está en determinar si al momento del traslado de prima media al RAIS la persona contó con información suficiente para tomar esa decisión. En este sentido, los actos u omisiones posteriores del afiliado, bien sea porque se trasladó entre fondos privados o no retornó a prima media en las oportunidades legales previstas, no pueden validar el desacato legal que genera la ineficacia del acto jurídico del traslado de régimen, precisamente porque al ser posteriores dejan intactos los hechos u omisiones que anteceden al acto jurídico ineficaz, el cual no puede sanearse como la nulidad.

Justamente lo anterior explica que la acción para demandar estos asuntos no sea la de nulidad -como también lo sugieren de forma equivocada aquellas providencias- sino la de ineficacia, en la cual, se reitera, lo relevante es determinar, sin más agregados, si la persona al momento de suscribir el acto de traslado de régimen pensional ha sido debidamente informada sobre las ventajas, desventajas y consecuencias de su traslado y permanencia en el RAIS.

Por tanto, nuevamente se enfatiza que este es el precedente vigente y en vigor de la Sala de Casación Laboral de esta Corte, y recoge cualquier otro que le sea contrario, en especial el condensado en aquellas providencias.

Conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores, se tiene que COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES nunca informaron acerca de las consecuencias que implicaba el traslado de régimen que son aspectos sumamente trascendentales que imposibilita acceder a la pensión de vejez, más aún cuando se desconoce sobre la incidencia que aquella puede tener frente a los derechos prestacionales de mi representada. Así las cosas, ante las irregularidades anotadas en la vinculación, ruego se entre a estudiar la aludida solicitud con base en las pruebas que deben reposar en la entidad, esto es, la documentación donde conste la afiliación y la información detallada que se le brindó al momento de trasladarse a la señora ANA MARIA DEL PILAR LINARES CASTRO al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por la demandada.



COMPETENCIA Y CUANTIA

Es usted competente, señor juez, para conocer de la presente demanda, en consideración de la naturaleza Del proceso.

PROCEDIMIENTO

A la presente demanda debe dársele el trámite de un proceso ordinario de primera instancia, consagrado en el capítulo XIV Del Código Procesal de Trabajo artículo 74 y s.s.

MEDIOS DE PRUEBA

Solicito a su señoría decretar las siguientes:

DOCUMENTALES:

1. Copia de la Cedula de Ciudadanía de la señora ANA MARIA DEL PILAR LINARES CASTRO
2. Copia del derecho de petición presentado a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS.
3. Copia del fallo de tutela ordenando a COLFONDOS dar respuesta a la petición.
4. Respuesta a la petición presentada a COLFONDOS.
5. Historial de semanas cotizadas expedido por COLFONDOS.
6. Formulario de afiliación a COLFONDOS.
7. Historial de semana cotizadas expedido por COLPENSIONES.
8. Proyección de la mesada pensional por parte de COLFONDOS S.A.
9. Copia del derecho de petición presentado a COLPENSIONES.
10. Respuesta a la petición presentada a COLPENSIONES.

INTERROGATORIO DE PARTE

- Solicito a su señoría, se sirva decretar y ordenar la práctica del interrogatorio al representante legal de la demandada, COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, o quien haga sus veces, con el fin de que absuelva los interrogantes sobre los hechos 4,5,6, y 7 de la demanda, para lo cual podrá ser citado en la dirección y correo electrónico de notificación judicial registrado en la cámara y comercio aportada con la contestación de la demanda.
- Solicito a su señoría, se sirva decretar y ordenar la práctica del interrogatorio al representante legal de la demandada, ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, o quien haga sus veces, con el fin de que absuelva los interrogantes sobre los hechos 4,6,5 y 7 de la demanda, para lo cual podrá ser



citado en la dirección y correo electrónico de notificación judicial registrado en la cámara y comercio aportada con la contestación de la demanda.

ANEXOS

1. Los enunciados en el acápite de pruebas.
2. Poder para actuar.
3. Tarjeta profesional del suscrito.

NOTIFICACIONES

APODERADO: El suscrito las recibirá en la dirección calle 8 no. 7 – 35 oficina 201 del centro de Neiva Huila, y autoriza notificación al correo electrónico alejandorabogado86@gmail.com, números de contacto 3214104602 y 3108035199.

DEMANDANTE: ANA MARIA DEL PILAR LINARES CASTRO las puede recibir en la dirección de CALLE 78 NO. 8 – 42 CAMINOS DE LA PRIMAVERA en la ciudad de Neiva Huila, y al correo electrónico anamaria08212014@hotmail.com

COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS en la dirección de correo electrónico procesosjudiciales@colfondos.com.co

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES en la dirección de correo electrónico notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co

ATENTAMENTE:

JORGE ALEJANDRO BERNAL MOLINA
C.C. No. 1.075.218.157 de Neiva.
T.P. No. 259.603 Del C. S. de la J.